



In the summer of 2001, the *Austin American-Statesman*—along with the City of Austin and the U.S. Attorney—was in diligent pursuit of what happened to the \$1.45 million in public funding and another \$3.70 million in private funding for Vision Village, a four-year old project that has yet to produce any of its promised 156 low-cost housing units. Pursuit of this story is an important watchdog function. But the larger watchdog role for all the local news media in Austin is the question of how to provide affordable housing for both the chronically depressed portions of the city and, increasingly, for middle-income citizens priced out of the market by the city's economic boom. It is

likely that the Vision Village situation ultimately will be resolved by the civil and criminal courts. The judicial process will not resolve Austin's housing situation. But the Austin news media can put this situation on the public agenda and keep it there through the long period of working-through to some resolution. It took Austin more than 15 years to settle the matter of building a new airport. Building individual housing is much more complex. In short, the watchdog role of the news media cannot be limited to an investigative series of reports—even if it wins a prize—or a running story on just one aspect of a larger community situation.

The news media frequently are agenda-setters. But what is the civic relevance and utility of the items placed on the agenda? Jay Rosen commented in *What Are Journalists For?* that "the point of having journalists around is not to produce attention, but to make our attention more productive."¹⁹ News media need to be creative watchdogs and agenda-setters scanning the horizon for the gaps in current public life. Part of this larger watchdog role is functioning as social radar, not just a chronicler of what government and other institutions are doing right now, whether good or bad. This means setting two broadly defined goals: discovering the concerns of citizens and providing what the public really needs to know.

¹⁹ Rosen, Jay, *What are Journalists For?*, p. 295.

Prensa y poder político en México

Rossana Fuentes-Berain

En este trabajo Rossana Fuentes-Berain analiza la intrincada relación del ejercicio del poder en México con los medios de comunicación, en particular con la prensa escrita. Relación siempre tirante especialmente en momentos de transición y reajuste de las relaciones del poder político. (Palabras clave: Poder, de comunicación, poliarquía, medios periodismo, accountability.)



INTRODUCCIÓN

Cierto es que en no tienen un los periodistas y por la

el mundo, los políticos particular aprecio por prensa. En México, caso del que nos ocuparemos en este trabajo, Vicente Fox los ha llamado el "círculo rojo" o "los contreras", mientras que Rosario Robles, se ha referido a reporteros del periódico *Reforma* como "La Gestapo". Los priístas, en cambio, con mayor oficio de gobierno, son más cuidadosos en público, pero en privado, se unen a las quejas de los otros dos partidos políticos importantes.

De manera que, el poder está resintiéndose al contrapoder y, este fenómeno no empezó el 2 de julio del año 2000, muy a pesar de los afanes foxistas por explicar la historia nacional alrededor del momento de su elección. En realidad, el proceso de transformación de las relaciones entre la prensa y los políticos mexicanos dio inicio a finales de la década de

los setenta y principios de los ochenta —cuando menos una década antes de que el ranchero de Guanajuato descubriera su tardía vocación de servicio público—. Pero, ¿cómo se empezó a gestar el cambio en esta relación? ¿Quién o qué lo propició? ¿Quiénes son los poderosos y quiénes los impunes, los medios o los políticos?

Factores materiales como el final del monopolio en la producción de papel periódico por parte del Estado, en 1998; e inmateriales como la reforma política de 1976-1977, el avance de la dimensión electoral de la democracia y la creciente profesionalización de la carrera periodística son los principales motores del cambio en esa relación.

De lo anterior, podemos decir que esta transformación va de la mano de un cambio en la ciudadanía, ya que durante esos mismos 20 años ésta ejerció su musculatura política, descubrió su identidad y, finalmente, no sólo determinó sus preferencias en un solo postulado: no quería más al PRI en la Presidencia, sino que actuó electoralmente en consecuencia.

En este contexto, la prensa escrita no se “empoderó”, entre 1976 y el año 2000, por sí misma en estricto sentido, sino como consecuencia y de manera paralela al “empoderamiento” de la ciudadanía. Esto no quiere decir que los medios se hayan vuelto “impunes”, como lamentan los políticos, sino que estos últimos, ahora sí, no pueden serlo; esto es, si quieren mantenerse en el poder, la realidad del país los obliga a rendirle cuentas, no a los medios, sino a la ciudadanía.

A lo largo de este ensayo, trataré de explicar y analizar la complejidad que implica que el poder esté resintiéndose al contrapoder, es decir, la relación entre medios y política. Para

lograr este objetivo, en primer lugar, daré las definiciones teóricas de los conceptos que utilizaré para sustentar mi análisis; en segundo lugar, haré un análisis histórico sobre el desarrollo de la relación entre medios y política; en tercer lugar, mencionaré algunos de los casos más recientes en los que es posible palpar el cambio en la relación entre medios y política; para finalmente, dar mis conclusiones.

ALGUNAS DEFINICIONES TEÓRICAS

El poder, ¿con qué se come? Al igual que respecto al amor, hay tantos tratados y contratados sobre lo que es el poder que tenemos que pasar por el ejercicio básico de escoger una de sus tantas definiciones para enmarcar nuestro análisis.

S. Lukes define tres dimensiones del poder en *Power, a Radical View*, mismas que Adrián Zenz retomó en su artículo la “Evaluación del empoderamiento” y que serán el marco de este trabajo:

La primera dimensión nos describe al poder como “la habilidad para movilizar eficazmente los recursos materiales e inmateriales de manera que los resultados de las decisiones le sean favorables al interesado”.

En la segunda, el “poder es la capacidad para confinar el marco del proceso de decisión de tal manera que se excluyan de los debates los asuntos que no sean de su interés, con lo cual se limita, en términos reales, la participación de los otros”.

En la última dimensión, el poder es “el intento de moldear las percepciones, conocimiento y preferencias de la gente para legitimizar la agenda propia”.

Ahora bien, la redefinición que Zenz hace de las tres dimensiones de este concepto por cuanto a la noción de “empoderamiento” (*empowerment*) es de especial pertinencia para nuestro caso de estudio, dado que eso es lo que experimentaron la ciudadanía y los medios en los últimos veinte años en México; y, al igual que el poder, el empoderamiento tiene tres dimensiones:



En la primera dimensión, el empoderamiento tiene que ver con "desarrollar la habilidad para tener acceso al control de lo material y no material de los recursos y la movilización efectiva de los mismos para influir en el resultado de las decisiones".

Dentro de la segunda, "es la capacidad para acceder e influir en el proceso de decisión a varios niveles (hogares, comunidad, nación, global) para asegurarse la representación de los intereses propios (también se describe como tener una voz)".



Finalmente, en la tercera, el empoderamiento "es adquirir conciencia de las ideologías dominantes y de la naturaleza del dominio al que uno está sometido para descubrir la identidad propia y en última instancia desarrollar la capacidad para determinar de manera independiente las preferencias propias y actuar en consecuencia a ellas".

Otro de los conceptos teóricos a los que constantemente estaré recurriendo en este trabajo, debido a su estrecha relación en el proceso de transformación de la relación entre medios y política, es el análisis de Guillermo O'Donnell sobre el concepto de rendición de cuentas o *accountability*. En él, O'Donnell posiciona a los medios de comunicación como una de las entidades que propician la rendición de cuentas vertical; mientras que a los órganos constitucionales del Estado (como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos) los describe como las entidades que propician un esquema de rendición de cuentas horizontal.

En este mismo contexto, O'Donnell y Cunill Grau explican que los políticos son *accountable*, es decir, responsables de sus actos porque no

basta con que el poder se derive "de fuentes legítimas, sino que es preciso que su propio ejercicio sea también legítimo, a partir, en principio, de la posibilidad de su justificación y subsecuente contestación por otros".

Así también, Schedler complementa las definiciones de O'Donnell al señalar que el concepto de rendición de cuentas o *accountability*, involucra tres diferentes maneras de prevenir y limitar el abuso en el ejercicio del poder, a través de "el sometimiento del poder a la amenaza de sanciones; obligarlo a que se ejerza de manera transparente; y, forzándolo a justificar sus actos".

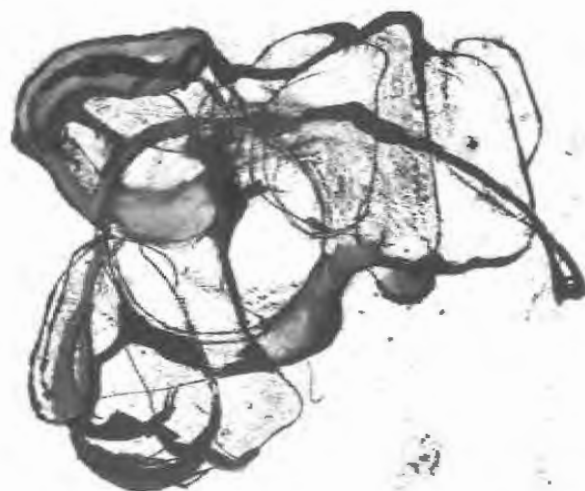
De manera que, de acuerdo con el concepto anglosajón de *accountability*, ésta habrá de entenderse en este trabajo como una mezcla entre la rendición de cuentas y la responsabilización de los actos de los políticos.

Por último, incluiré en el análisis el concepto de poliarquía de Robert Dahl, quien la define como "un orden político que se singulariza por la presencia de siete preceptos, todos los cuales deben estar presentes para que sea posible clasificar un gobierno poliárquico." De las siete características, dos tienen especial relevancia en el caso de los medios: libertad de expresión y variedad de fuentes de información.

Poder, empoderamiento, poliarquía, rendición de cuentas y responsabilidad serán los conceptos que enmarcarán este trabajo y, con ellos, trataré de explicar la transformación en la relación medios y política en México.

BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA RELACIÓN MEDIOS/POLÍTICA EN MÉXICO

Como se mencionó en la introducción, el fin del monopolio de Estado en la producción de papel periódico, la reforma política de 1976-1977, las reformas electorales para consolidar la democracia y la profesionalización periodística fueron y son elementos fundamentales en el proceso de transformación de la relación medios/política.



El monopolio del papel

El periodo posrevolucionario, y sobre todo la época del despliegue hegemónico del partido único en México (1934-1977) hay que entenderlo como un espacio en el que las tres dimensiones del poder, mencionadas anteriormente, eran las que privaban en la relación prensa escrita-poder político.

"Productora e Importadora de Papel S.A. fue creada por decreto del general Lázaro Cárdenas el 21 de agosto de 1935, después de un conflicto en la principal fábrica de papel periódico de aquella época, la Compañía San Rafael".

El ejercicio del poder en cuanto a lo que se refiere a la primera dimensión, descrita por Lukes, era tal en México que la generosidad material del régimen, generalmente, agregaba al insumo entregado a precios y condiciones preferentes otro elemento inmaterial, las igualmente prolíficas sugerencias de qué poner en el papel.

En 1954, durante la inauguración de la nueva planta de PIPSA, los editores de periódicos escucharon el mensaje personal del presidente Adolfo Ruiz Cortines en el que les reiteró su "absoluto respeto a la libertad de prensa" pero les externó también su "confianza en que los periodistas sabrán servir con eficacia y lealtad a la patria".

Así lo hicieron. Los valores tradicionales del priismo, al que por cierto se afilió el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa por acuerdo de su VI Convención Anual (1954), la lealtad, la obediencia, y el apoyo a los ideales de la Revolución mexicana fueron la cohesión social que propagaban entusiastamente medios impresos y electrónicos. En la prensa se coronó la vertiente que percibía al receptor de la información, al ciudadano, como un sólo cuerpo, como un ente llamado "pueblo" que no se

configuraba por la yuxtaposición de individualidades sino por la disolución de las conciencias individuales. Más allá de las excepciones, por cuanto siempre hubo los independientes marginales, en los 127 diarios y 673 revistas de todo género que circulaban en ese momento en la República mexicana, la norma era "la línea del Señor Presidente".

Tres décadas enteras la prensa escrita mexicana no fue un contrapoder, fue un instrumento más del poder, que lo ayudaba a cabalidad a cumplir con la tercera dimensión de Lukes: la legitimización, en este caso, de la agenda priista.

La carencia de variedad de fuentes de información y una libertad de expresión disminuida fueron la norma en esta época de ausencia de polarización en México.

En el verano de 1968, la relación de la sociedad con el poder político empezó a cambiar. La prensa fue uno de los elementos en los que ese cambio habría de hacerse evidente. Cada marcha estudiantil por Paseo de la Reforma se detenía en el número 18, bajo el balcón del director de *Excelsior*, a gritar: ¡Prensa vendida! Al final del movimiento estudiantil, ese balcón fue ocupado por un personaje que habría de ser central en la historia del periodismo nacional, Julio Scherer García, quien sustituyó a Manuel Becerra Acosta (padre) el 31 de agosto de 1968.

En su libro *Los presidentes* Scherer narra sin demasiado rigor autocrítico que en *Excelsior* no se ocultaba la información del conflicto estudiantil que cimbró al mundo y a México en el verano de ese año, pero también hace una reflexión posterior a la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco:

Excelsior había informado con honradez y veracidad acerca de los sucesos en Tlatelolco. Esto era cierto, pero no me engañaba. Habíamos escamoteado a los lectores capítulos enteros de la historia de esos días. Poco sabíamos de la vida pública de los presos políticos, menos aún de su intimidad, y habíamos evitado las entrevistas con ellos. Sabía bien que en nuestras manos había estado la decisión de cumplir o no con ese trabajo, pero también sabía que el presidente (Gustavo Díaz Ordaz) no había propiciado el mejor clima para el desarrollo de una información irrestricta.

En un par de años Scherer García se asentó en el cargo y empezó a ejercer con seguridad y pasión un periodismo que, dice Rodríguez Castañeda, "exhibía a funcionarios e instituciones gubernamentales lo mismo que a empresarios y personajes de la iniciativa privada". En 1972 el ejercicio de esa libertad de prensa le trajo a *Excelsior* un boicot publicitario por parte de los empresarios mexicanos y, cuatro años después, la salida de su Director General.

La reforma política de 1976-1977

El bienio 1976-1977 fue especialmente importante en México tanto para la prensa escrita como para la política. Para los periodistas el golpe a *Excelsior* resultó una bendición disfrazada, dos publicaciones, *Proceso* y *Unomásuno* habrían de ser semillero de una prolífica generación de reporteros y editores que ya habían probado las hieles de la censura y comenzaban a disfrutar las mieles de la independencia.

Para los políticos, la reforma de Jesús Reyes Heróles, publicada en el *Diario Oficial* el 30 de diciembre de 1977 como La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), abrió la puerta a un verdadero juego democrático entre partidos de ideologías y valores diferentes a los de la Revolución institucionalizada y que hasta entonces no sólo habían sido excluidos del debate central de la Nación, como establece la segunda dimensión del concepto de poder de Lukes, sino que se les consideraba como una amenaza para la seguridad y la cohesión social del país.

México inició con esta reforma un largo camino hacia la transformación que habría de llevarlo a ser una sociedad MDP (moderna, dinámica y pluralista; así la define Dahl).

Este tránsito de ninguna manera fue lineal. En el sexenio de José López Portillo, políticos y periodistas, se vieron exhibidos frente al gran público ante una frase célebre "no te pago para que me pegues", que permitió a la ciudadanía otear el resquebrajamiento de una relación entre el poder político y la prensa escrita. Con esa sentencia, López Portillo verbalizó una norma no escrita de la relación prensa-poder.

Aquí, cabe señalar que esta declaración de López Portillo queda perfectamente enmarcada en la definición de norma jurídica no escrita de Rolando Tamayo y Salmorán, ya que ésta se encuentra "contenida en los usos y costumbres o tradiciones que observan los miembros de la comunidad." En este mismo sentido, y de acuerdo con una de las tesis del maestro Eduardo García Maynes, también se colige que la declaración de López Portillo describe el universo de esas reglas no escritas que a "diferencia de las normas del derecho, que poseen siempre una estructura imperativo-atributiva, los convencionalismos son, en todo caso unilaterales. Ello significa que obligan más no facultan".

El jefe del Ejecutivo Nacional que, en un arranque de rabia, tan prístinamente desveló esa forma de convencionalismo entre medios y políticos, terminó su sexenio con la nacionalización de la banca, un acto emblemático, puro, un momento plástico de lo que fue el irrestricto poder priísta durante décadas, ese poder tridimensional que no tenía que rendir cuentas a nadie más que a sí mismo.

Crisis económica y el sismo de 1985

López Portillo tiene razón en describirse como el último presidente de la Revolución mexicana. Ni en política ni en los medios habría de ser nada igual después de su sexenio.

La nacionalización de la banca, el 1 de septiembre de 1982, deriva en la entrada al escenario público, vía el Partido Acción Nacional, de un grupo de empresarios medianos del norte de la República como Manuel Clouthier, Francisco Barrio y Ernesto Rufo, quienes invitaron a sus congéneres de otras regiones del país a irrumpir en la política para organizar la resistencia ante actos de autoridad sin cortapisas como el del 1 de septiembre de 1982.



Es en ese contexto que en el centro-occidente del país, el agro-empresario Vicente Fox Quezada empieza a asomar la bota.

El sexenio de Miguel de la Madrid se inició en medio de una crisis económica, la inflación llegó a ser de tres dígitos y la paridad del peso frente al dólar se desplomó, de tal suerte que un periódico que había surgido un año antes con la vocación explícita de explicar los fenómenos económicos, *El Financiero*, empezó a ser un medio de referencia obligada.

Por primera vez, desde la década de los treinta, lo financiero era objeto de cobertura específica así como también de estudio y análisis internos dado que los subsidios gubernamentales ya no eran ni tan expeditos ni tan generosos.

La seriedad que el problema económico representaba para los medios, se conjugó con una revuelta interna en el diario *Unomásuno* que propicia la salida de los subdirectores Carlos Payán, Miguel Ángel Granados Chapa, y Carmen Lira, más el Jefe de Información Humberto Mussachio y varios reporteros y editores. Estos rebeldes fundan el 19 de septiembre de 1984 *La Jornada*, un proyecto periodístico que desde el inicio se plantea como parte de la sociedad. Exactamente un año después de su salida a la calle, *La Jornada* se coloca a la cabeza de la cobertura del sismo que devastó a la ciudad de México.

Ante ese desastre natural, la ciudadanía de la capital explayó la primera dimensión del empoderamiento (definido por Zenz) y empezó a desarrollar la habilidad para tener acceso al control de lo material y no material de los recursos, así como para conseguir la movilización efectiva de los mismos e influir en el resultado de las decisiones. En cuanto a los medios, podemos afirmar que, de entre los periódicos capitalinos, *La Jornada* fue el que dio mayor voz a los ciudadanos afectados por el sismo.

Ya entrados en la segunda mitad de la década de los ochenta, el diario dirigido por Carlos Payán Véliz se asentó como el espacio de resonancia para las huelgas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el desprendimiento del ala más nacionalista del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que entre otras cosas se oponía a la apertura comercial de México iniciada con

el ingreso a la ahora Organización Mundial del Comercio, antes el GATT.

Así, *La Jornada* se convirtió en un elemento activo del tercer nivel de empoderamiento, bajo el cual se adquiere conciencia de las ideologías dominantes y de la naturaleza del dominio al que uno está sometido para descubrir la identidad propia y, en última instancia, desarrollar la capacidad para determinar de manera independiente las preferencias propias y actuar en consecuencia a ellas.

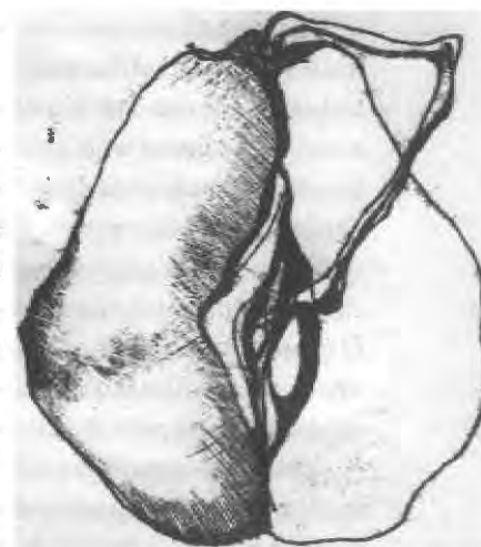
En México, después de la reforma política de 1976-1977 (LOPPE) y del sismo de 1985, empezó a cambiarse no sólo de régimen político sino de cultura política porque "lo que está cambiando en este caso va más allá de los rasgos de un régimen y se refiere a una transformación en la matriz de la relación entre Estado y sociedad civil, es decir, a una transformación de la política misma y del sentido de la acción colectiva".

Los medios, a partir de la mitad de la década de los ochenta, se presentan como un elemento importante de la cultura política en transición.

Periódicos de corte necesariamente conservador por su origen, como *El Universal*, comienzan a dar cabida en sus páginas editoriales a representantes del pensamiento político más variado, pero no sólo en las secciones de opinión de los medios impresos comienza a asomar una nueva cultura política, en la radio también aparecen programas como Monitor de Radio Red, en los que el ciudadano de a pie tiene voz, aunque todavía no voto, bueno, no creíblemente contado.

De las elecciones de 1988 al TLC

La disputa respecto a los resultados de la elección presidencial de 1988 fue para la ciudadanía y para la prensa nacional otro espacio de definición.



El memorable encabezado de *El Financiero* del 7 de julio: "Nada para nadie", marcó que el diario de Rogelio Cárdenas, padre e hijo, flanqueara las barreras de su nombre e ingresara al debate político nacional. Aunado a esto, otra ruptura en la prensa escrita provocó que varios "jornaleros" transitaran hacia las páginas de este tabloide de vocación económica, en donde permanecieron entre 1991 y 1993.

Si el proceso de empoderamiento estaba ya bien asentado para esta época, el de rendición de cuentas de los políticos frente a la sociedad no tanto. El triunfalismo salinista a raíz de las elecciones de mitad de sexenio, y de la negociación con Estados Unidos y Canadá de un Tratado de Libre Comercio dio pie a otra perla del sistema político priista: "Ni los veo, ni los oigo".

Como ya se mencionó con anterioridad, el concepto de *accountability* implica una mezcla entre rendición de cuentas y responsabilización y, de acuerdo con ello, la frase de Salinas es el ejemplo absoluto de la falta de la misma. Se salió con la suya, hasta el *annus horribilis* de 1994, cuando no hubo manera de jugar más al autismo.

A querer o no, el ocaso de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se enfiló ese año electoral hacia la democratización, la cual consiste "en someter todos los intereses a la competencia, en la institucionalización de la incertidumbre. El paso decisivo hacia la democracia es la transferencia del poder de un grupo de personas a un conjunto de normas".

Un nuevo diario, *Reforma*, llega por esas mismas fechas a las calles de la ciudad de México como una expansión del Consorcio Interamericano de Comunicación (CICSA) editora, entre otros, del periódico *El Norte*.

Propiedad de la familia Junco de la Vega, los diarios *El Norte* en Monterrey y *Reforma* en el Distrito Federal se establecieron, el primero desde la década de los setenta y, el segundo desde la mitad de los noventa, como un paradigma de la prensa independiente económica y políticamente.

Educado en la Universidad de Austin, Texas, Alejandro Junco de la Vega incorporó a su desempeño profesional los principios generales del periodismo anglosajón: distancia del poder político; balance informativo; independencia económica; separación de lo editorial y lo empresarial; y, códigos de ética irrenunciables por parte del personal editorial.

El 20 de noviembre de 1994, con un año ya de circulación, *Reforma* se enfrenta en la ciudad de México a la última pata del poder gubernamental en lo que se refiere al control de los medios: la distribución monopolizada por una Unión de Voceadores leal al régimen priista.

Junco de la Vega ya había combatido exitosamente al monopolio de PIPSA, imprimiendo sus diarios en papel importado antes aun de que la compañía se privatizara; por lo que, enfrentarse a la Unión de Voceadores y establecer su propia red de distribución era un seguimiento empresarial lógico para consolidar su independencia editorial, y así lo hizo.

Otro de los beneficios indirectos de la llegada a México del empresario periodístico del norte del país fue el reacomodo del mercado salarial en la industria periodística. En todas las redacciones, a partir de 1994, se elevaron los salarios profesionales de los periodistas como una reacción de sobrevivencia frente al nuevo competidor.

La generación de periodistas formados en las aulas de distintas universidades públicas y privadas de la República mexicana, después del golpe

a *Excélsior* de 1976, inició su madurez profesional en una situación de mercado competido en el cual encontró terreno fértil una valoración largamente retrasada de su capital intelectual.

El avance electoral hacia la democracia y la profesionalización periodística

"Si se busca una fecha iniciática del nuevo papel de los medios de comunicación en México, ésta es el primero de enero de 1994." La variante inicial, obvio, fue la apa-



rición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de su mediático líder, el subcomandante Marcos (Rafael Sebastián Guillén), pero luego llegaron el asesinato del candidato a la presidencia por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio y la del secretario general del mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu. Y, como si fuera poco, el año terminó con una devaluación del peso frente al dólar estadounidense.

Cuando el presidente Ernesto Zedillo presentó su Plan Nacional de Desarrollo 1995/2000, el "destape" de la prensa mexicana era ya un hecho consumado y el empoderamiento de la sociedad también. La rendición de cuentas, sin embargo, tardó más en llegar y lo hizo de manera paulatina a medida que la posibilidad de la alternancia política se estableció como una vertiente real de la política nacional.

Para los políticos, no hay como la amenaza real de perder el poder para acicatear a los gobernantes a atender dos tipos de *accountability*: la horizontal y la vertical. "La rendición de cuentas (*accountability*) vertical es ejercida por los actores societales con respecto a los actores estatales y la rendición de cuentas horizontal es ejercida dentro del estado por diferentes órganos estatales".

Para los periodistas, no hay mayor tentación que el protagonismo heroico, las explicaciones autocomplacientes del gremio colocan a los medios como el corazón valiente de un proceso de transición democrática mexicana. Esa explicación, que satisface el ego de los comunicadores, es también atractiva, por otras razones, para los políticos, pues en ella encuentran que pueden hacer al mensajero, el chivo expiatorio de sus propias desgracias.

Lo cierto es que la definición de los medios como actores centrales, que complace a unos y a otros por distintas razones, no se apega a la verdad. Los medios son acaso sólo un elemento, el más visible, pero sólo uno de entre varios, en la dimensión vertical de la *accountability*.

"La publicidad sobre algo puede contribuir poderosamente a la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas misma requiere penalidades mas allá del conocimiento público, cuando menos la capacidad de destituir a un funcionario de su puesto. Sin sanciones, dar a conocer un he-

cho puede mantenerse en el rango del alegato de que los poderosos siempre encuentran maneras de salirse con la suya".

Este concepto, el de la capacidad de publicitar o publicar un hecho por parte de los medios y, al mismo tiempo, su incapacidad para forzar a una rendición de cuentas, es básico. Corresponde sólo al poder político o al empoderamiento ciudadano cerrar el círculo, es decir, propiciar la consecuencia de un acto público por parte de los que deben rendir cuentas. Los medios no son tan poderosos como creen algunos de sus representantes ni como los describen interesadamente los políticos.

La historia reciente de México documenta cómo los medios publicaron diversos temas que podían sugerir tácita o explícitamente la necesidad de una rendición de cuentas, y no fue sino hasta cuando organismos constitucionales autónomos, o los poderes troncales mismos, intervinieron para llamar a cuentas a los representantes públicos cuando realmente se produjo una "responsabilización" o proceso de *accountability*.

Esto no quiere decir que los periódicos no puedan contribuir a ventilar los abusos de los políticos, sino simplemente apunta hacia el dimensionamiento del supuesto poder mediático que tanto molesta a los políticos mexicanos y que, a mi juicio, no es tal si no va derivado de un "empoderamiento" de la ciudadanía o de una exigencia de rendición de cuentas horizontal, desde las instituciones mismas, o vertical, también desde la soberanía popular.

CASOS RECIENTES QUE MUESTRAN EL CAMBIO EN LA RELACIÓN MEDIOS/POLÍTICA

El primer caso que debemos recordar está vinculado con la forma en que las actividades de uno de los personajes más repudiados por la prensa mexicana, José Córdoba Montoya, poderoso Coordinador de la Presidencia de 1988 a 1994, fueron una y otra vez expuestas por los periodistas y qué pasó, nada. El caso más flagrante de desaseo en el desempeño de este funcionario público se vio literalmente sacado de la alcoba cuando

el periódico *Reforma* publicó las grabaciones de una conversación telefónica entre Córdoba Montoya y una conocida intermediaria de los cárteles de la droga, Marcela Bodenstedt Perlick.

En el *affair* Córdoba/Bodenstedt no hubo consecuencias porque, a pesar de que los medios le dieron enorme cobertura al asunto de la influencia política de Córdoba y sus relaciones peligrosas, a la ciudadanía no le importaba realmente el tema. La respuesta del presidente Ernesto Zedillo a estas revelaciones fue declarar que eso era un asunto en todo caso conyugal y no político.

Una tónica similar al caso precedente se adoptó por parte del Jefe del Ejecutivo ante la revelación de que el Secretario de Educación del mismo presidente Zedillo, Fausto Alzati, no tenía el grado de doctor que había ostentado durante muchos años, vamos, Alzati ¡ni siquiera había terminado cabalmente la licenciatura! Pero, la separación del cargo del fraudulento doctor Alzati no llegó por la vía de lo publicado por los medios, sino por la presión política al interior del gabinete debido a la torpeza de las declaraciones del interfecto, que hacía gala de su desinterés por rendir cuentas a cualquiera que no fuera el que lo había designado.

Un tercer elemento que demuestra la relatividad del poder e incluso del empoderamiento mediático lo encontramos en el caso de los secuestros en el estado de Morelos. Durante meses la prensa escrita y la electrónica documentaron la epidemia de secuestros en el Estado, las evidencias que apuntaban en el mejor de los casos a la negligencia oficial y en el peor de ellos a la complicidad entre servidores públicos y delincuentes se apilaban, pero no fue sino hasta después de una enorme marcha ciudadana y la detención en Guerrero de un jefe policiaco que había cruzado la frontera interestatal para tirar un cadáver, delito por

el cual se le arrestó y se fincaron cargos, cuando realmente se inició el derrumbe de Carrillo Olea.

El empoderamiento de los mexicanos es cada vez mayor, como lo demuestran encuestas como la Mundial de Valores, la cual establece que, en el periodo de dos décadas, de 1980 al 2000, una de las grandes felicidades de los ciudadanos fue su estrenada capacidad de elegir. Es evidente, para mí, que el creciente proceso de empoderamiento ciudadano es el detonador de la rendición de cuentas y el dique de la impunidad pública.

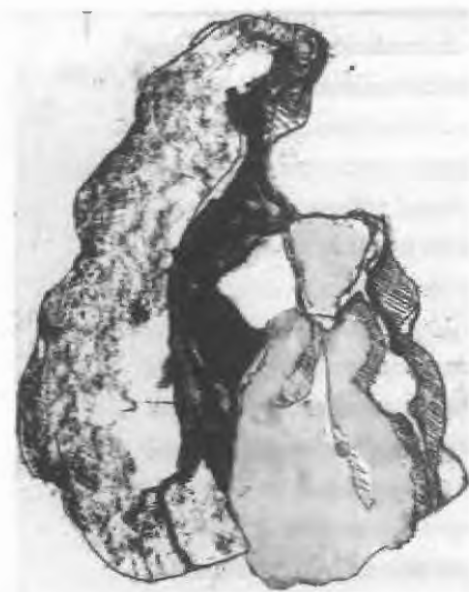
La elección del presidente Fox y las dos victorias consecutivas del PRD en la ciudad de México son producto de ese empoderamiento. Los medios han crecido paralelamente a ese destape ciudadano, no por encima de él, ni tampoco a costa del poder de los políticos.

Aquí se aplica la norma de Przeworski, "¿Quién vigila al vigilante?, la respuesta es que lo hacen las fuerzas de la sociedad civil movidas por su propio interés particular".

Los dos casos más recientes del llamado a la rendición de cuentas por parte de figuras públicas, los gastos excesivos en la remodelación de Los Pinos, el "toallagate", y los gastos publicitarios de Rosario Robles, lo demuestran. Las consecuencias de ambos no se explican por la supuesta acción de una prensa poderosa e impune, sino por la reacción de una ciudadanía empoderada e impaciente ante las luchas intestinas de los políticos y la corrupción pública.

En el caso de Rosario Robles, quien se dice agraviada por el encabezado del *Reforma* del 13 de abril de 2001 "Detectan irregularidades a Robles", es menester recordar que fue su propio compañero de partido y sucesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, el que usó el término de irregularidades en diciembre de 2000.

Por cuanto al asunto de las toallas de \$4 500 pesos y las sábanas de \$30 000 para la cabaña del presidente Fox en Los Pinos, la reacción inicial del presidente Fox no difirió mucho de la de su antecesor en cuanto al caso Córdoba, buscó minimizar el asunto como uno de carácter doméstico y sostuvo que, en todo caso, los mexicanos debíamos de estar contentos del grado de transparencia desplegado por su gobierno que hasta





el precio de los enseres carseros hacia público. No fue por la cobertura de la prensa al tema sino por la reacción popular al asunto que Fox, el eterno lector de encuestas, decidió finalmente separar de su cargo al responsable del entuerto.

CONCLUSIONES

La relación entre los políticos y la prensa mexicana ha cambiado en los últimos 20 años. Factores materiales como el fin del monopolio en la producción de papel

periódico por parte del Estado, en 1998, e inmateriales como la reforma política de 1976-1977, el avance de la dimensión electoral de la democracia y la creciente profesionalización de la carrera periodística son los principales motores del cambio en esa relación.

La exigencia ciudadana para que sus representantes políticos le rindan cuentas ha crecido consistentemente en el último cuarto de siglo, y una de las entidades que se hacen eco y/o propician este proceso han sido los medios.

La función periodística primigenia, aquella que señala que deben establecerse como contrapoder dentro de una sociedad, no se entendería sin otro proceso simultáneo y largamente anhelado: el empoderamiento democrático de la ciudadanía.

Por primera vez en nuestra historia como Nación el poder se comparte. A querer o no, los políticos tienen que hacerlo, por mandato entre las

tres ramas de gobierno y los órganos autónomos constitucionales, y por instinto de sobrevivencia con la ciudadanía, tornada en opinión pública cuando se habla de los medios.

Ese es el dilema presente en el gobierno del presidente Vicente Fox. Los políticos, aun los liberalizadores, desean una democracia que los mantenga en el poder y se indignan cuando ésta se vuelve contra ellos. Intentan aferrarse al poder mientras pueden, pero llega un momento en que deben optar entre dar un paso atrás y restablecer el autoritarismo o seguir avanzando hacia la emancipación autoritaria.

Por supuesto que estos no son procesos ni acabados ni de una sola vez. Los hechos van delante de una revisión jurídica indispensable que transforme las normas no escritas entre los medios y la política que, aunque han cambiado de lo que existía durante buena parte del siglo XX, aún no tienen forma legal.

La mejor forma conocida de evitar la impunidad en cualquiera de los dos ingredientes de la ecuación medios/política sería dándole marco jurídico y, por supuesto, haciendo que la ley se cumpla, como dice el maestro Miguel Carbonell, de acuerdo con la Constitución, ésa es la asignatura pendiente para el siglo XX.